



Suprema Corte de Justicia

A-75912

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.912, "Unibike S.A. contra ARBA. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores **Torres, Genoud, Soria, Kogan.**

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en instancia originaria, rechazó íntegramente la pretensión anulatoria dirigida por la firma Unibike S.A. y el señor Gabriel Hugo Morbelli contra la resolución 2.271, por medio de la cual la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación declaró la caducidad del procedimiento impulsado.

Disconforme con dicho pronunciamiento, los actores interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.

Dictada la providencia de autos, presentado el memorial de la Fiscalía de Estado y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de



Suprema Corte de Justicia

A-75912

inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:

I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en instancia originaria, rechazó íntegramente la pretensión anulatoria dirigida por la firma Unibike S.A. y el señor Gabriel Hugo Morbelli contra la resolución 2.271, por medio de la cual la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación declaró la caducidad del procedimiento impulsado.

Para así decidir, advirtió que tanto la intimación al cumplimiento de la contribución y de la carga previsional, como la posterior declaración de caducidad del procedimiento, fueron notificadas al domicilio constituido en la ciudad de La Plata por el doctor John Ryan Lussich, apoderado de los aquí actores.

Consideró que no se daban en el caso ninguno de los supuestos que, según el art. 26 del decreto ley 7.647/70, obligan a intimar al interesado a su domicilio real para que establezca un nuevo domicilio constituido.

Añadió que la falta de un aviso a los letrados de la demandante por parte del local donde se constituyó el domicilio configuraba una circunstancia cuyas consecuencias recaían sobre los interesados y que, por lo tanto, resultaban ajenas a la Administración.

Sostuvo que, tanto en lo atinente a la



Suprema Corte de Justicia

A-75912

notificación de la intimación previa, efectuada por cédula al domicilio constituido por la parte actora en su recurso de apelación, como en lo tocante a la declaración de caducidad procedimental una vez transcurrido el plazo de seis meses, el accionar del organismo interviniente resultó ajustado a derecho. Descartó por ello la alegada nulidad en el trámite.

En cuanto a la legitimidad de la resolución cuestionada, interpretó que el Tribunal Fiscal de Apelación se limitó a exigir el cumplimiento de un requisito que suspende el trámite hasta tanto se le dé cumplimiento (conf. arts. 12 inc. "g" y 15, ley 6.716) y que los sucesos que impactan en el curso posterior "...forman parte del conjunto de responsabilidades de quien tiene a su cargo el impulso adjetivo...".

Tras reputar aplicables al caso los arts. 127 y 128 del decreto ley 7.647/70, razonó que la parálisis del procedimiento era imputable a la inactividad de los apelantes, que ponía en evidencia su desinterés por la continuidad del trámite.

Negó que se hubiera incumplido lo prescripto por el art. 315 del Código Procesal Civil y Comercial, en el entendimiento de que este precepto queda desplazado por la existencia de una norma expresa y singular que rige el supuesto en cuestión (conf. arts. 4, Cód. Fiscal y 127, dec. ley 7.647/70).

Destacó que, con carácter previo a la declaración de caducidad, el Tribunal Fiscal de Apelación



Suprema Corte de Justicia

A-75912

emplazó a los interesados. En su visión, ello colocó al procedimiento en un nivel adecuado de respeto a la garantía del debido proceso, reconocida en el art. 18 de la Constitución nacional.

Indicó que lo anterior determinaba la desestimación del planteo de inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 6.716, sin dejar de agregar que -a su juicio- la actora formuló al respecto una mera enunciación, ineficaz como embate crítico.

II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los actores denuncian violación o errónea aplicación de los arts. 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de Apelación y 13, 15 y concordantes de la Ley de la Caja de Previsión Social para Abogados n° 6.716.

Añaden que el fallo recurrido carece de sustento jurídico suficiente y que afecta en forma directa derechos y garantías constitucionales, tales como los principios de debido proceso, igualdad, razonabilidad y primacía normativa.

Relatan que, a través de la resolución 2.271, la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación dispuso la caducidad del procedimiento, en los términos del art. 127 del decreto ley 7.647/70, pese a que, por el art. 15 de su Ley Orgánica, el organismo se encuentra obligado al impulso de oficio y cuenta con facultades para establecer la verdad material.

Indican que, en virtud de lo dispuesto por el



Suprema Corte de Justicia

A-75912

recién citado art. 15 del decreto ley 7.603/70, las notificaciones pertinentes deberían haberse realizado en el domicilio fiscal de Unibike S.A. o en el constituido en las actuaciones administrativas y que, con independencia de ello, debería haberse avanzado con las pruebas solicitadas y las peticiones formuladas sobre el fondo de la cuestión controvertida.

Deducen que el Tribunal Fiscal de Apelación se apartó de los deberes establecidos por la ley especial aplicable (dec. ley 7.603/70 y modif.), invocando una ley general (dec. ley 7.647/70 y modif.) y una norma absurda e inconstitucional (contenida en la ley 6.716).

En el entendimiento de que las actuaciones profesionales desarrolladas en el ámbito del Tribunal Fiscal de Apelación no devengan honorarios, infieren que el art. 13 de la ley 6.716, relativo a la obligación de pago del anticipo previsional, no resulta aplicable al caso de autos.

Tras reproducir lo normado por el ya mentado art. 15 del decreto ley 7.603/70 (texto según ley 11.796), aducen que imponer a los particulares el impulso del procedimiento, cuando este ha sido establecido en forma expresa a cargo del Tribunal Fiscal de Apelación, supone una tergiversación de las disposiciones legales vigentes.

Alegan que en su oportunidad se formularon pedidos concretos, tendientes al impulso de las actuaciones, que no fueron atendidos por el organismo



Suprema Corte de Justicia

A-75912

mencionado, motivo por el cual niegan que se haya configurado abandono del procedimiento. Más allá de lo indicado, refutan que el Tribunal Fiscal de Apelación cuente con facultades para no tratar el recurso interpuesto ante su seno.

Reprochan que la Cámara interviniente haya desatendido lo prescripto por la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de Apelación y acudido en cambio a la Ley de Procedimiento Administrativo. Con independencia de ello, advierten que en su capítulo XIII, destinado a los recursos, esta última no contempla ninguna razón que permita no tratar el remedio interpuesto en tiempo y forma. De lo anterior extraen que el impulso del procedimiento en cuestión no podía verse obstaculizado por la falta de pago de aporte previsional alguno.

A continuación, plantean la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 6.716, en la inteligencia de que el precepto violenta lo establecido por los arts. 16, 18, 28, 31 y concordantes de la Constitución nacional; 11, 15 y 57 de la provincial; y por pactos internacionales de jerarquía constitucional.

Sostienen que decretar la caducidad del procedimiento en razón de no haberse acreditado el pago de aportes previsionales importa una medida excesiva y una total privación del acceso a la justicia. Puntualizan que este derecho no puede limitarse por medio de la reglamentación, en procura de una recaudación preventiva que resulta inexigible en tanto no se devengaron



Suprema Corte de Justicia

A-75912

honorarios.

Precisan que suspender los trámites hasta tanto se practiquen aportes previsionales no puede derivar en la desprotección de quien se presentó en un expediente y ejerció su derecho de defensa. Tampoco podría por esa vía desconocerse la validez de las actuaciones realizadas en el marco del procedimiento administrativo.

Con cita del art. 57 de la Constitución provincial, señalan que los jueces deben soslayar la aplicación de las normas que se interpongan con mandatos constitucionales. Arguyen que, si bien el Tribunal Fiscal de Apelación carece de la potestad de declarar la inconstitucionalidad de disposiciones tributarias, puede expedirse en ese sentido cuando se trate de otra clase de preceptos, o en su defecto, simplemente no aplicarlos.

Estiman no ajustado a derecho que en un mismo proceso se le imponga a un abogado el pago de un anticipo previsional para que las actuaciones puedan proseguir, mientras que, por otra parte, los recursos patrocinados por contadores avanzan sin ningún impedimento de esa clase.

Más adelante, denuncian violación de la doctrina que ha sentado esta Corte, con relación al deber de motivar las sentencias, en las causas L. 66.063 y L. 62.544, entre muchas otras. Aseguran que el fallo impugnado omitió analizar las normas y los argumentos en que se funda el pedido de nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación, violando así su deber de



Suprema Corte de Justicia

A-75912

justificar las decisiones adoptadas.

III. Por los fundamentos que a continuación desarrollaré, anticipo que -en mi opinión- el recurso debe prosperar.

III.1. El juego de normas en el cual se han basado tanto el Tribunal Fiscal de Apelación para declarar la caducidad del procedimiento seguido ante su seno como la Cámara interviniente para confirmar dicha decisión se estructura de la siguiente manera.

Por un lado, el art. 12 inc. "g" de la ley 6.716 -texto según ley 10.628- establece que el capital de la Caja de Previsión Social para Abogados se integra, entre otros conceptos, con "...una contribución a cargo del obligado al pago de la Tasa de Justicia, del diez (10) por ciento de su importe, que se abonará conjuntamente con aquélla". Inmediatamente, el precepto agrega: "En las actuaciones con intervención letrada ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones será del dos por mil (2%) del valor cuestionado".

A su turno, el art. 15 de la misma normativa indica: "En el territorio de la Provincia de Buenos Aires, los Jueces y Tribunales, así como los funcionarios y Tribunales de la Administración Pública y de Entes Públicos no estatales -con jurisdicción en el mismo-, no darán trámite alguno a las peticiones formuladas por afiliados de la Caja o patrocinadas por ellos, sin que acrediten el pago del anticipo del artículo 13° y/o la parte obligada el de la contribución del inciso g) del



Suprema Corte de Justicia

A-75912

artículo 12, según el caso".

Por último, los arts. 127 y 128 del decreto ley 7.647/70 prevén que, "[t]ranscurridos seis meses desde que un procedimiento promovido por un interesado se paralice por causa imputable al mismo, se producirá su caducidad...", la cual "...se declarará de oficio al vencimiento del plazo...".

De lo anterior se desprendería que la falta de acreditación del pago de la contribución previsional mentada por el art. 12 inc. "g" de la ley 6.716 impediría al Tribunal Fiscal de Apelación impulsar el trámite del recurso administrativo interpuesto ante ese órgano y que, tras seis meses de parálisis por dicha causa, solo restaría declarar -de oficio- la caducidad del procedimiento desarrollado.

III.2. En la especie, la vocal instructora de la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación intimó al recurrente a acreditar, dentro del plazo de diez días, el pago de la contribución previsional establecida por el art. 12 inc. "g" de la ley 6.716 (t.o. por dec. 4.771/95), bajo apercibimiento de tener por firme la resolución apelada en caso de producirse la caducidad del procedimiento. En la misma oportunidad, la funcionaria intimó a la letrada patrocinante a acreditar, dentro de igual término, el pago del anticipo previsional creado por el art. 13 de la normativa mencionada, bajo apercibimiento de comunicar su incumplimiento a la Caja profesional respectiva (v. fs. 1.023, expte. adm.



Suprema Corte de Justicia

A-75912

2360-280035/10).

La cédula a través de la cual se notificaron tales intimaciones fue dirigida a la calle 49 n° 918, local 1, de la ciudad de La Plata, lugar donde el letrado apoderado de Unibike S.A. y de Gabriel Morcelli, doctor John Ryan Lussich, con el patrocinio letrado de la doctora Victoria Taylor, había constituido domicilio en oportunidad de interponer el correspondiente recurso de apelación. Al cumplirse con dicho requisito procesal, en el escrito referido se añadió la expresión "...con aviso al Estudio Ryan Lussich & Asoc...", además de indicar un número telefónico de contacto, motivo por el cual, al confeccionarse la cédula en cuestión, parece haberse considerado pertinente agregar, con lapicera, la leyenda "Estudio Ryan Lussich y Cía." (v. fs. 934 y 1.025, expte. adm. cit.).

Transcurridos seis meses sin que se hubiese acreditado el pago de ninguno de los conceptos reclamados, la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación procedió a hacer efectivos los dos apercibimientos referidos, declarando -por un lado- la caducidad del procedimiento y -por otro- comunicando a la Caja de Previsión Social para Abogados que la letrada interviniente no había acreditado en las actuaciones el correspondiente pago del anticipo previsional (v. resol. 2.271, acompañada en copia y disponible en el sitio www.tfaba.gov.ar).

Dicha decisión se fundó en lo dispuesto por los



Suprema Corte de Justicia

A-75912

preceptos citados en el punto anterior de este voto, así como también en la doctrina del art. 318 del Código Procesal Civil y Comercial, norma considerada aplicable en virtud de la remisión practicada por el art. 4 del Código Fiscal, de acuerdo con la cual la caducidad operada en instancias ulteriores a la primera acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida.

Con posterioridad, el doctor John Ryan Lussich y la doctora Victoria Taylor se presentaron nuevamente en las actuaciones, acreditaron el pago de la contribución y el *ius* previsional, plantearon la nulidad de la notificación cursada y -en subsidio- dedujeron reposición contra la caducidad decretada. Pese a entender que ya había "culminado su jurisdicción", la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación rechazó dicho recurso defendiendo la regularidad de la notificación practicada, con cita de los arts. 25 del decreto ley 7.647/70, 141 del Código Procesal Civil y Comercial y 27 de su Reglamento Interno, así como también de su Acuerdo Extraordinario n° 50. El órgano destacó igualmente su deber de exigir la acreditación del pago de la contribución contemplada en el art. 12 inc. "g" de la ley 6.716, si bien ordenó comunicar a la Caja de Abogados la acreditación del pago del anticipo previsional por parte de la doctora Taylor (v. resol. 2.342, expte. adm. cit., disponible en el sitio www.tfaba.gov.ar).

III.3. Sustancialmente, los recurrentes reprochan en esta instancia un apartamiento de ciertos



Suprema Corte de Justicia

A-75912

principios que rigen en el procedimiento administrativo, tales como los de impulso de oficio y búsqueda de la verdad material, expresamente consagrados en la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de Apelación, que se habría perpetrado mediante la adopción de medidas de un formalismo excesivo. A su vez, denuncian afectación de la razonabilidad, el debido proceso, la igualdad y el acceso irrestricto a la justicia, fundamentos sobre la base de los cuales plantean también la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 6.716.

III.3.a. Cabe ante todo advertir que el procedimiento que se sustancia frente al Tribunal Fiscal de Apelación se encuentra regulado por el Código Fiscal, cuerpo normativo que -de manera supletoria- remite en primer término a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, donde se priorizan principios como la actuación de oficio y el formalismo moderado o la ausencia de rigor formal (conf. art. 4, Cód. Fiscal; dec. ley 7.647/70; causas B. 53.739, "Agroganadera del Sur", sent. de 11-VII-1995; y B. 55.910, "Llorente Hermanos", sent. de 28-IV-1998).

De allí que esta Suprema Corte haya reprochado la actuación del Tribunal Fiscal de Apelación que conspira contra los principios y reglas que informan el procedimiento administrativo en punto al impulso de oficio, celeridad, economía y eficacia en el trámite, lineamientos reconocidos por los arts. 7, 48 y 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo (conf. causa B.



Suprema Corte de Justicia

A-75912

66.926, "Kook Weskott", sent. de 6-VII-2005).

En similar línea, la Corte ha cuestionado también el excesivo rigor formal puesto de manifiesto en otra oportunidad por el Tribunal Fiscal de Apelación, reputando aplicables en ese ámbito los principios de formalismo moderado y buena fe, con el objeto de hacer efectiva la garantía del acceso irrestricto a la jurisdicción (conf. art. 15, Const. prov.), que conforma una de las bases primordiales del Estado de Derecho (conf. causa B. 66.398, "Banco de Servicios Financieros", sent. de 6-X-2010).

A lo anterior es menester agregar que, tras la modificación incorporada por la ley 11.796 (posterior a la que en su hora introdujo la ley 10.268 al art. 15 del régimen de la Caja de Previsión Social para Abogados), el art. 15 del decreto ley 7.603/70 coloca expresamente en cabeza del Tribunal Fiscal de Apelación el deber de impulsar de oficio el procedimiento. Ello se suma a las facultades reconocidas desde siempre por el precepto citado para establecer la verdad de los hechos controvertidos y resolver el caso sin perjuicio de lo alegado por las partes.

Pues bien, a la luz de tales directrices, parece evidente que las autoridades del Tribunal Fiscal de Apelación no estaban obligadas a actuar en el caso planteado como lo hicieron, es decir que no tenían necesariamente que intimar por única vez al cumplimiento de ciertos requisitos relacionados con el financiamiento



Suprema Corte de Justicia

A-75912

de una Caja profesional, para luego considerar paralizadas las actuaciones hasta tanto se regularizara dicha situación y, transcurridos seis meses, declarar sin más la caducidad del procedimiento administrativo a través del cual los interesados procuraban que se revisara una decisión que los afectaba.

Antes de arribar a tan gravosa conclusión, el Tribunal Fiscal de Apelación pudo y debió ejercer las facultades con que cuenta para hacer avanzar el trámite, habilitando en su caso la efectiva subsanación de aquellas deficiencias formales que se derivaran de la intervención letrada escogida por los recurrentes, de modo de asegurar en la especie la tutela administrativa continua y efectiva, así como el acceso irrestricto a la jurisdicción.

No ha de soslayarse que la intervención del particular en el trámite recursivo, amén de importar un medio de defensa de sus derechos e intereses, en tanto le brinda la posibilidad de reaccionar contra los actos que lo agravian, contribuye al control del proceso de formación de la voluntad administrativa. De allí que la supresión de esa participación por meras deficiencias formales remediables, de un lado, resulta incompatible con el derecho a la tutela administrativa efectiva (conf. art. 15, Const. prov.; CSJN Fallos: 327:4185) y, del otro, reduce las posibilidades de fiscalización de la actividad estatal (conf. causa B. 63.460, "Corigliano", sent. de 29-V-2019 y sus citas).



Suprema Corte de Justicia

A-75912

Tampoco debe perderse de vista que, por aplicación del principio de formalismo moderado, los defectos de forma en que puedan incurrir los interesados ante el órgano estatal son subsanables en favor de la verdad material y de la legalidad objetiva (conf. causas B. 52.262, "Solanas", sent. de 1-X-1990; B. 64.068, "Investigaciones Médicas S.A.", resol. de 29-IX-2005; B. 58.622, "Marín", sent. de 30-V-2007; B. 57.576, "Otero", sent. de 28-XII-2010; B. 60.554, "Suarez", sent. de 31-X-2012; A. 70.429, "Puppo", sent. de 19-III-2013; entre muchas), a menos que se trate de recaudos esenciales (cfr. causa B. 60.510, "Sciutto", sent. de 8-II-2006 y sus citas), carácter este último que ciertamente no reviste la acreditación del pago de la contribución dispuesta por el art. 12 inc. "g" de la ley 6.716 ante un organismo como el Tribunal Fiscal de Apelación, donde el patrocinio puede incluso ser ejercido -sin el pago de aportes como requisito previo- por un contador público (conf. art. 120, Cód. Fiscal -t.o. 2011-).

No se me escapa que, en autos, la Sala II del mencionado tribunal administrativo ha tenido ocasión de defender la actuación verificada, sobre la base de la regularidad de la única intimación que se practicó con el fin de habilitar la subsanación de la falta de pago de la contribución previsional. El organismo ha señalado puntualmente en tal sentido que la cédula en cuestión fue dirigida al domicilio constituido por los propios



Suprema Corte de Justicia

A-75912

apelantes; que no resultaba necesario hacer constar en ella que debiera darse "aviso" al estudio Ryan Lussich & Asociados, ni procurar contacto telefónico mediante el número indicado en el recurso deducido; y que, tal como se desprende del informe redactado al dorso del instrumento, este fue dejado bajo la puerta por la oficial notificadora tras reiterados llamados sin obtener respuesta alguna, posibilidad contemplada en la normativa aplicable (v. resol. 2.342, cit.).

Aun en la hipótesis de coincidirse con que, considerada en sí misma, la cédula referida no presentase irregularidades, resulta claro que el organismo administrativo referido tenía a su disposición mayores herramientas para poner en conocimiento de los interesados tanto la deficiencia formal observada como las fatales consecuencias para el derecho de defensa que podían hacerse derivar del incumplimiento de la ya aludida obligación para con la Caja de Previsión Social para Abogados.

Entre otras opciones, las autoridades involucradas podrían haber insistido con el reclamo practicado mediante nuevas intimaciones, o bien entablar una comunicación telefónica echando mano del número expresamente consignado a tal efecto en el recurso de apelación, de modo de corroborar la recepción de tan importante mensaje.

No solo nada se oponía a ello, sino que, en aplicación de los principios previamente indicados, así



Suprema Corte de Justicia

A-75912

debió haberse procedido en el escenario planteado, al menos si se acepta la cuestionable premisa conforme a la cual el incumplimiento mentado podía sin más dar lugar ulteriormente a la declaración de caducidad del procedimiento.

III.3.b. En un sentido contrario al recién apuntado, la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación decidió considerar paralizadas las actuaciones por el tiempo suficiente para finalmente declarar -de oficio- la caducidad del procedimiento administrativo impulsado.

Cierto es que, entre sus arts. 127 y 130, el decreto ley 7.647/70 contempla ese modo anormal de culminación del trámite, pero como este se inserta en un régimen caracterizado por la vigencia del principio instructorio, que pone en cabeza de la Administración la responsabilidad de impulsar el procedimiento y que reivindica como cometido esencial la obtención de la verdad material, los autores que se han ocupado del tema oscilan entre advertir cierta "incongruencia" en la regulación (conf. Hutchinson, Tomás; *Procedimiento administrativo de la Provincia de Buenos Aires*, Astrea, Buenos Aires, 1995, pág. 549) y asignarle, entre otros caracteres, los de interpretación restrictiva y carácter facultativo. A raíz de ello, la caducidad no debería declararse si no resultara sobradamente claro que la Administración no puede instar el procedimiento ni tampoco sería imperativa para la autoridad a cargo del trámite, quien podría mantener la cuestión en suspenso o



Suprema Corte de Justicia

A-75912

intimar al interesado a realizar los actos de impulso necesarios que de él dependan (conf. Botassi, Carlos A. y Oroz, Miguel H. E.; *Procedimiento administrativo de la Provincia de Buenos Aires*, 2da Edición, Librería Editora Platense, La Plata, 2011, págs. 659/661).

Amén de lo expuesto, viene al caso señalar que el art. 127 del decreto ley 7.647/70 exige una "causa imputable" al interesado para que se configure la caducidad del procedimiento una vez transcurridos seis meses desde la paralización de las actuaciones.

Al respecto, el Tribunal Fiscal de Apelación mantuvo en la especie una distinción. Desde su primera (y única) intimación, aclaró que el apercibimiento por la falta de acreditación del pago de la contribución del art. 12 inc. "g" de la ley 6.716 sería -eventualmente- la declaración de caducidad del procedimiento, mientras que la sanción por la falta de acreditación del pago del anticipo previsional consistiría simplemente en comunicar el incumplimiento a la Caja profesional respectiva. Y en su oportunidad, obró de conformidad con lo indicado (v. fs. 1.023, expte. adm. 2360-280035/10 y resol. 2.271, cit.).

Por cierto, en ningún momento el organismo interviniente brindó alguna explicación que avalase esta dualidad de criterios, lo que de algún modo conspira contra la debida motivación con que debe contar todo acto administrativo (arg. art. 108, dec. ley 7.647/70) y puede haber movido a confusión sobre el punto, pero la razón



Suprema Corte de Justicia

A-75912

para la diferenciación parece relacionarse con los sujetos obligados al pago de uno y otro concepto: mientras que el *ius* previsional constituye un pago a cuenta del diez por ciento de aportes a cargo del letrado interviniente (conf. art. 13, ley 6.716), la contribución contemplada en el art. 12 inc. "g" del régimen de la Caja de Abogados se encuentra expresamente "...a cargo del obligado al pago de la Tasa de Justicia..." (concepto este último que no es necesario abonar para transitar el procedimiento recursivo en cuestión).

De lo anterior el Tribunal Fiscal de Apelación parecería extraer que solo la falta de acreditación del pago de la contribución aludida constituiría una causa de paralización de las actuaciones "imputable al interesado", que como tal generaría -transcurridos seis meses- la caducidad del procedimiento (conf. art. 127, dec. ley 7.647/70); en cambio, el incumplimiento asociado con el anticipo previsional dependería solamente del letrado actuante, motivo por el cual no procedería por esta causa idéntica declaración.

Es -como mínimo- dudoso que la conclusión referida pueda ser vista como la consecuencia de una interpretación restrictiva sobre los casos en que procede la declaración de caducidad del procedimiento administrativo, en los términos del art. 127 del decreto ley 7.647/70.

III.3.c. En cuanto al procedimiento que rodeó la declaración de caducidad practicada, cabe advertir que



Suprema Corte de Justicia

A-75912

el organismo administrativo actuante no la sustanció tras considerar verificados los requisitos contemplados por el art. 127 del decreto ley 7.647/70, pues realizó una única intimación tendiente a que se acreditase el pago de la contribución previsional, bajo apercibimiento de tener por firme la resolución apelada en su debido momento, es decir, recién cuando transcurrieran seis meses de inactividad. Cumplido este término, procedió sin más a dictar la resolución impugnada en autos.

Sobre el punto, el art. 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que la caducidad "...se declarará de oficio al vencimiento del plazo...", mas esto no equivale a decir que ella opere de pleno derecho, sino simplemente que no depende de petición de parte interesada.

Es cierto que el precepto citado no prevé la necesidad de una intimación a que se manifieste la intención de continuar con el trámite una vez que ya se ha registrado la inactividad que habilita la declaración de caducidad, como sucede en el proceso judicial (conf. arts. 315, CPCC -texto según ley 13.986- y 77.1., CCA; doctr. causas A. 72.324, "Oleaginosa Moreno", sent. de 26-X-2016 y A. 74.516, "Del Río", sent. de 24-IV-2019), pero ello no impide aplicar tal criterio en el procedimiento que se desarrolla ante el Tribunal Fiscal de Apelación.

Además de tratarse de la solución más compatible con la tutela administrativa continua y



Suprema Corte de Justicia

A-75912

efectiva y con el principio *pro actione* o *favor actionis* (conf. art. 15, Const. prov.; causas B. 53.836, "Cadegua", sent. de 21-III-2001; B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-IX-2003; B. 62.799, "Albornoz", sent. de 16-IX-2009; B. 59.642, "Baldi", sent. de 26-X-2010; B. 60.760, "García", sent. de 19-XII-2018; B. 54.823, "Algeri", sent. de 11-IX-2019, e.o.), es dable advertir que el art. 315 del Código Procesal Civil y Comercial resulta aplicable supletoriamente en el procedimiento que nos ocupa, de acuerdo con lo previsto por el art. 4 del Código Fiscal.

III.3.d. Llegado a este punto, considero oportuno añadir que, en su última parte, el art. 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que la declaración de caducidad "...podrá recurrirse por el interesado".

Como ha sido precedentemente puntualizado (v. punto III.2., último párr. de este voto), los interesados interpusieron en su oportunidad recurso de reposición contra la resolución aquí debatida, el cual fue rechazado sobre la base de distintos argumentos, entre ellos que "...este Cuerpo ha culminado su jurisdicción, por cuanto ha dictado la sentencia de caducidad el 26 de julio de 2016..." (v. resol. 2.342, cit., voto de la mayoría).

Si bien la pretensión anulatoria objeto de este proceso se ha dirigido contra la resolución de la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación que declaró la caducidad del procedimiento y no específicamente contra la que



Suprema Corte de Justicia

A-75912

rechazó el recurso de reposición intentado posteriormente (v. escrito de demanda, esp. a fs. 12 vta./13), entiendo que el repaso de las circunstancias enunciadas permite brindar un panorama más completo respecto de la problemática abordada, al igual que sobre la conducta asumida en la especie por el organismo involucrado.

III.4. De acuerdo con todo lo que hasta aquí ha sido manifestado, estimo que les asiste razón a los recurrentes en cuanto señalan que la Cámara interviniente incurrió en error de juzgamiento al convalidar una actuación del Tribunal Fiscal de Apelación que se aparta notoriamente de los principios recogidos por el art. 15 del decreto ley 7.603/70 -texto según ley 11.796-, así como de otros aplicables al procedimiento administrativo desarrollado, tras detectar un incumplimiento formal enteramente subsanable y accesorio, que no pudo conducir como lo hizo a la declaración de caducidad cuestionada, sin afectar el derecho constitucional de defensa, la tutela administrativa continua y efectiva y el acceso irrestricto a la jurisdicción (arg. art. 15, Const. prov.), así como también la buena fe que debe regir los actos de la Administración.

Respecto de esto último, cuadra recordar que -con cita de Jesús González Pérez- esta Corte ha reconocido que, en el ámbito del procedimiento administrativo, tal principio obliga a la Administración a proceder con una conducta leal y honesta. El comportamiento administrativo ha de ser el que, según la



Suprema Corte de Justicia

A-75912

estimación de la gente, puede esperarse de una persona, evitando actitudes confusas, equívocas o maliciosas (v. causas B. 56.965, "Zubillaga", sent. de 12-VIII-2009; B. 64.148, "Clínica del Niño de Quilmes", sent. de 11-IV-2018; B. 65.203, "Pérez", sent. de 31-VIII-2021, voto del doctor Pettigiani -al cual adherí-; e.o.).

IV. Por los fundamentos vertidos, que considero suficientes para decidir, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por los actores; revocar la sentencia atacada; anular la impugnada resolución 2.271, por medio de la cual se declaró la caducidad del procedimiento administrativo impulsado; y -en su oportunidad- devolver las actuaciones administrativas al Tribunal Fiscal de Apelación, para que continúe el trámite según su estado.

Voto por la **afirmativa**.

Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (conf. arts. 51 inc. 1 y 60 inc. 1, CCA -texto según leyes 14.437 y 13.101, respectivamente-; 68, arg. 274 y 289, CPCC).

El señor Juez doctor **Genoud**, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la **afirmativa**.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. Adhiero a la solución del recurso y, particularmente, a lo señalado por el doctor Torres en el punto III.3.a. de su voto, pues en las singulares



Suprema Corte de Justicia

A-75912

circunstancias de este caso se verifica la denunciada inaplicación o violación del art. 15 del decreto ley 7.603/70 (texto según ley 11.796), que aquí llamaba al impulso oficioso del procedimiento.

II. Lejos de propugnar que la actuación del Tribunal Fiscal de Apelación deba conducirse con la flexibilidad más propia de una autoridad administrativa con competencia decisoria primaria (conf. arts. 3, 10, 48, 54, 59, 72, 73 y conchs., dec. ley 7.647/70) -máxime cuando en etapas recursivas haya de primar el principio del formalismo atenuado (arg. art. 74, dec. ley cit.; doctr. causa B. 57.139, "Atitran SA", sent. de 26-VI-2023)-, el carácter y naturaleza del obstáculo hallado (*i.e.*, la falta de ingreso de la contribución y el aporte previstos en los arts. 12 inc. "g" y 13 de la ley 6.716 -texto según ley 10.628-), sumado a un evidente pedido de los representantes legales de la empresa para que se intente dar aviso a un número telefónico ante cualquier eventualidad (algo que el funcionario notificador parece haber tenido presente dada la anotación marginal realizada sobre la cédula), da cuenta de que el organismo -al aguardar a que se cumplieran seis meses de inactividad para inmediatamente decretar la caducidad- se condujo con una estrictez incompatible con la etapa administrativa en la que todavía se hallaba el expediente, aplicando un temperamento incluso más extremo que aquel que podría tener cabida en sede judicial (arg. art. 315, CPCC).



Suprema Corte de Justicia

A-75912

III. Refiriéndose a ese ámbito, la Corte federal recientemente ha tenido oportunidad de recordar que "...por tratarse la caducidad de la instancia de un modo anormal de terminación del proceso, y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar, con exceso ritual, el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio" (Fallos: 346:1455).

Se trata de apreciaciones que, *a fortiori*, han de extenderse al contexto administrativo, donde el impulso oficioso constituye la regla general. Y en este supuesto, como bien lo remarca el doctor Torres, el tribunal administrativo tuvo a disposición mecanismos que -sin mayor esfuerzo- hubiesen evitado la perención del trámite y, con ello, conservado el derecho de revisión pretendido por la firma contribuyente y el responsable solidario (arg. art. 15, Const. prov.).

Voto por la **afirmativa**.

La señora Jueza doctora **Kogan**, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la **afirmativa**.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por los actores, se revoca la sentencia atacada, se anula la resolución impugnada 2.271, mediante



Suprema Corte de Justicia

A-75912

la cual se declaró la caducidad del procedimiento administrativo impulsado y se dispone devolver las actuaciones administrativas al Tribunal Fiscal de Apelación, para que continúe el trámite según su estado.

Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (conf. arts. 51 inc. 1 y 60 inc. 1, CCA -texto según leyes 14.437 y 13.101, respectivamente-; 68, arg. 274 y 289, CPCC).

Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.

Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 17/04/2024 17:28:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ

Funcionario Firmante: 18/04/2024 08:59:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ

Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:51:03 - KOGAN Hilda - JUEZA

Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:19:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ

Funcionario Firmante: 19/04/2024 14:13:59 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



Suprema Corte de Justicia

A-75912



233000290004805433

**SECRETARIA DE DEMANDAS ORIGINARIAS - SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA**

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el
19/04/2024 14:17:55 hs. bajo el número RS-37-2024 por DO\jmartiarena.